

## Aprender y enseñar en un contexto rural

Tomás Montemerlo y Federico Azpiroz Costa

Nos encontramos ante un mundo que es cada vez menos rural. Las últimas décadas presenciaron un desplazamiento de poblaciones rurales hacia zonas urbanas. Y la tendencia continuaría: según la ONU, para 2030 el 60% de las personas vivirán en áreas urbanas.

Sin embargo, el 9% de la población argentina<sup>1</sup> reside hoy en ámbitos rurales. Y, bajo este contexto, encontramos 19.599 unidades educativas rurales<sup>2</sup> situadas en localidades con menos de 2.000 habitantes<sup>3</sup>. En ellas la pobreza, las largas distancias y la falta de recursos, hacen que indicadores como las tasas de inasistencia y repitencia sean mayores, y las de egreso efectivo menores. Muchas veces, los niños y jóvenes que asisten a estas escuelas se ven obligados a trabajar para colaborar con el sostenimiento de sus familias y, en muchos casos, una vez finalizada la primaria no ingresan a la educación secundaria. De esta forma, solamente 1 de cada 5 alumnos logra terminar la secundaria rural y, de cada 100 jóvenes que asisten, 17 dejan la escuela al finalizar el año y ya no regresan en marzo. Nacer en un contexto desfavorable marca su futuro.

En las escuelas primarias rurales, que representan el 47% de las escuelas primarias de la Argentina<sup>4</sup>, nos encontramos con la modalidad plurigrado y todos los desafíos que conlleva. En un mismo espacio y en simultáneo, trabajan estudiantes matriculados en diferentes años de escolaridad. El 81% de las escuelas rurales funcionan bajo esta modalidad<sup>5</sup> y esto permite que la cobertura de nivel primario esté garantizada, con índices apenas más bajos que en las zonas urbanas. Pero no sucede lo mismo con el acceso a la educación secundaria. Vivir lejos de un centro urbano o de una escuela secundaria rural, muchas veces sin acceso a energía eléctrica, al agua potable y en una situación económica desfavorable, impide a una gran cantidad de argentinos aprender en la escuela secundaria como lo establece la Ley de Educación Nacional.

Recorriendo el país encontramos zonas atravesadas con problemáticas de desnutrición, mal de Chagas, hacinamiento y deficiencia en los hogares y servicios básicos. Los problemas del aislamiento, necesidades básicas insatisfechas y la falta de acceso a la educación secundaria son una constante en el contexto de la ruralidad en la Argentina y requieren de políticas específicas. Más allá de las acciones implementadas para construir escuelas y equiparlas, es necesario pensar en políticas educativas a largo plazo que tengan impacto directo en las herramientas que tienen los docentes para potenciar los aprendizajes. Por ejemplo, la formación docente inicial no incluye herramientas para el plurigrado. “Lo rural” pareciera haber quedado reservado a espacios de seminarios o cursos de especialización.

---

<sup>1</sup> *Censo Nacional 2010*

<sup>2</sup> *RA2015, DiNIECE, Ministerio de educación de la Nación.*

<sup>3</sup> *Las zonas que superan los 2000 habitantes son consideradas urbanas. Fuente: Mapa Educativo Nacional, Ministerio de Educación.*

<sup>4</sup> *DiNIECE 2015b.*

<sup>5</sup> *DiNIECE 2015a.*

Los docentes, directores y directoras de escuelas primarias, que muchas veces son personal único, se ven sobrecargados con multiplicidad de tareas que desarrollan en soledad. No hay personal no docente que los asista o docentes de áreas especiales como educación física o artística que enriquezcan la enseñanza. No cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante la educación que la sociedad demanda y se ven obligados a cumplir otros roles, como ser porteros, cocineros o lo que la urgencia requiera. Hacen un trabajo admirable, pero la falta de herramientas impide alcanzar los niveles educativos que quisiéramos, tal como se evidencia en los operativos nacionales de evaluación.

Cada día, el docente rural se encuentra con estudiantes que recorren muchos kilómetros para llegar a la primaria y, en el caso de la escuela secundaria, muchos más. En moto, a caballo, en bicicleta o a pie por caminos que muchas veces están en malas condiciones y que, cuando llueve, se vuelven intransitables. Intransitables tanto para ir a la escuela como para llegar a una sala de atención primaria o a un hospital. Intransitables para acceder a cualquier derecho básico.

Cuando, por la ausencia del Estado, desde las organizaciones de la sociedad civil acercamos propuestas innovadoras a las escuelas y a los docentes, la respuesta suele ser positiva. Valoran el acompañamiento y el monitoreo constante para seguir mejorando. Es mediante ese acompañamiento que muchos estudiantes logran acceder a la escuela y ser la primera generación familiar en acceder a la secundaria. Las organizaciones sociales asumimos el desafío de trabajar junto con las comunidades para mitigar las problemáticas específicas que enfrentan. Por momentos, suplimos la ausencia del Estado, pero no perdemos de vista la necesidad de llevar a cabo innovaciones que puedan ser escalables.

Tenemos por delante el reto de desnaturalizar realidades y hacer posibles proyecciones de futuros diferentes. El no acceso a la escuela secundaria, la falta de vinculación de la familia con la escuela, las dificultades relativas a la infraestructura y al equipamiento, y la soledad de los equipos docentes, son realidades cotidianas que afectan directamente los derechos básicos de las personas. Abordar esta realidad de exclusión y hacer posible el ejercicio del derecho a la educación es nuestro deber. Es necesario cuestionarnos y entender que pasaron ya casi 20 años del siglo XXI y que todavía seguimos debatiendo planes de educación que no logran volverse realidad en las aulas. Si algunos cambios apenas asoman en las escuelas urbanas de enseñanza tradicional, las escuelas rurales ven muy lejana esta implementación.

Para lograrlo debemos realizar un trabajo de visibilización de problemáticas y movilización de comunidades que favorezca el posicionamiento de la educación en la agenda local. Se requiere sumar una nueva mirada: la mirada sistemática de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, que favorezca la definición de procesos, facilite la implementación en un mayor alcance y posibilite la identificación de resultados. Debemos cambiar la manera de mirar y de mirarnos. Colocarnos lentes críticos que vean más allá de aquellos actos heroicos de docentes rurales o de las organizaciones de la sociedad civil que los acompañan. Debemos exigirnos más como sociedad y desarrollar políticas públicas y programas innovadores para todos. Esto implica entender que la educación en el contexto de la ruralidad no es una excepción, por lo cual hay que garantizar y acompañar su llegada e implementación a los rincones más aislados de la Argentina.